



## Consejo Económico y Social

Distr. general  
17 de noviembre de 2015  
Español  
Original: inglés

---

### **Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer**

**60º período de sesiones**

14 a 24 de marzo de 2016

**Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial  
sobre la Mujer y del vigésimo tercer período  
extraordinario de sesiones de la Asamblea General,  
titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre  
los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”**

### **Declaración presentada por Federation of Women Lawyers – Kenya, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico y Social \***

El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 36 y 37 de la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

---

\* La presente declaración se publica sin revisión editorial.



## Declaración

### Antecedentes

Según el *Informe sobre desarrollo humano* del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el coeficiente de desigualdad humana de Kenya en 2013 era del 32,7%. En la publicación *Economic Survey 2014* se señala que el 45,2% de los kenianos vivía por debajo del umbral de la pobreza en el momento en que se realizó el estudio. La incidencia de la pobreza en los 47 condados se situaba entre un mínimo del 21,8% en Nairobi y un máximo del 87,5% en Turkana. La tasa de pobreza en la capital era aproximadamente la mitad del promedio nacional, mientras que Turkana tenía el doble del índice de pobreza. Las desigualdades socioeconómicas y políticas en Kenya están arraigadas en las características históricas y estructurales del país, entre las que cabe citar la discriminación por motivos de origen étnico y sexo, las políticas económicas que favorecen las zonas agrícolas muy productivas y los favoritismos económicos regionales por parte de los regímenes anteriores. Estas características revelan no solo la desigualdad vertical que pone de relieve las disparidades entre las personas, sino también la desigualdad horizontal (entre grupos) y la desigualdad en dimensiones como, por ejemplo, el tiempo necesario para acceder a recursos tales como agua, combustible, madera y establecimientos de salud.

Sin embargo, el empoderamiento de las mujeres sigue siendo uno de los pilares esenciales para lograr el crecimiento y el desarrollo sostenibles de un país. La Constitución de Kenya incorpora una detallada Carta de Derechos que garantiza a todos los ciudadanos kenianos los derechos sociales, económicos y políticos fundamentales. Además, el Gobierno ha promulgado leyes y políticas que hacen efectiva la Carta de Derechos tanto a nivel nacional como a nivel de los condados. Kenya también ha incorporado a su derecho interno determinadas leyes internacionales.

Asimismo, se han emprendido reformas estructurales en los organismos y las instituciones gubernamentales clave encaminadas a facilitar el acceso rápido a la justicia y la prestación de servicios. Cabe mencionar, entre otros, el Servicio de Policía Nacional, el poder judicial y el servicio público. Pese a estas iniciativas, Kenya se ve gravemente afectada por la falta de esfuerzos deliberados por parte de los garantes de derechos para aplicar la Constitución, la legislación nacional y de los condados, así como las leyes internacionales incorporadas en su derecho interno. Estas limitaciones paralizan el progreso hacia el empoderamiento de las mujeres y afectan negativamente a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esta declaración escrita se centra en componentes específicos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya efectividad depende del empoderamiento económico, social y político deliberado y sustantivo de las mujeres de Kenya. La declaración aborda lo siguiente:

- Las lagunas legislativas en materia de igualdad de género;
- Las carencias estructurales en materia de igualdad de género;
- Las deficiencias de la capacidad o el conocimiento en materia de igualdad de género.

### **Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas**

La igualdad de género es uno de los pilares esenciales del crecimiento y el desarrollo sostenibles de un país. Entre las nuevas esferas de desigualdad en Kenya cabe señalar la representación y participación políticas en los procesos de adopción de decisiones, el acceso a la justicia, la educación básica y los servicios de salud, el acceso a la tierra y a los derechos de propiedad, y la prestación de servicios generales y de seguridad a los kenianos.

En lo que respecta al empoderamiento político, las mujeres conforman el 51,4% de la población y el 47% de los votantes inscritos en Kenya, pero esta fuerza numérica no queda de manifiesto en su representación en el liderazgo político y la adopción de decisiones. La disparidad entre los géneros a la hora de ejercer el voto continúa siendo un problema, ya que el 16% de las mujeres de Kenya sigue sin tener un nivel mínimo de alfabetización, frente al 9% de hombres. Esta situación afecta a los derechos de voto, puesto que las mujeres dependen de los funcionarios electorales para comprender, interpretar y registrar debidamente su intención de voto. Las personas analfabetas también tienen más probabilidades de ser persuadidas para que vendan su voto, o de ser engañadas o intimidadas para que voten. Además, las instituciones políticas, desde los partidos políticos hasta la Comisión Electoral, también adolecen de una capacidad limitada para garantizar que las políticas públicas reflejen y tengan en cuenta los intereses de las mujeres.

En cuanto al empoderamiento económico, Kenya es actualmente la novena mayor economía de África, con un producto interno bruto de 55.000 millones de dólares tras el cálculo de la nueva base del producto interno bruto de Kenya, en septiembre de 2014, y después de que alcanzara la categoría de país de ingresos medianos bajos en 2012. Sin embargo, las mujeres, que constituyen la fuerza de trabajo más numerosa en Kenya, especialmente en el sector agrícola, solo perciben una pequeña proporción de los ingresos generados. La Ley de la Comisión Nacional de Tierras de 2012, la Ley de Tierras de 2012 y la Ley de Registro de Tierras de 2012 han favorecido a las mujeres allá donde tradicionalmente se les han concedido pocos o ningún derecho a la tierra y a la propiedad. No obstante, las estadísticas aún confirman que el acceso a la tierra y su control distan mucho de ser igualitarios. Solo el 5% de los títulos de propiedad de la tierra en Kenya son de propiedad conjunta, y únicamente el 1% de estos títulos está exclusivamente a nombre de mujeres. Ello se debe en gran medida a la legislación discriminatoria, la corrupción y a problemas institucionales que han impedido a las mujeres adquirir títulos de propiedad de la tierra.

### **Hacia el principio de los dos tercios de cualquiera de los géneros**

La Constitución de Kenya obliga al Estado a garantizar que ninguno de los géneros ocupe más de dos tercios de los cargos electivos y de designación directa. Sin embargo, las mujeres todavía constituyen el 19,8% de los miembros de la Asamblea Nacional, el 6,1% de los miembros de las asambleas de los condados y el 21,2% de todos los miembros del gabinete. La Constitución fijaba asimismo, hasta agosto de 2015, el plazo para que el Gobierno estableciera un mecanismo que permitiera cumplir el principio de los dos tercios de cualquiera de los géneros. Posteriormente, el Fiscal General del Estado constituyó un grupo de trabajo técnico encargado de preparar una fórmula para la aplicación del principio de los dos tercios

de representación de cualquiera de los géneros. El grupo de trabajo examinó todas las recomendaciones y optó por una fórmula viable a modo de enmienda de la Constitución para reproducir las disposiciones del artículo 177 b), relativo a la composición de una asamblea de condado, en los artículos 97 y 98, relacionados con la composición de la Asamblea Nacional.

Pese a que se le ha presentado un mecanismo viable, el Estado no ha promulgado legislación favorable para que se aplique el principio. A medida que se acercan las elecciones generales de 2017, una vez más, no se dispone de ningún marco para propiciar la igualdad sustantiva en puestos de liderazgo, mediante la representación de ambos géneros y otros grupos de intereses especiales, e impulsar la participación en las estructuras políticas de adopción de decisiones. Las diputadas de la Asamblea Nacional Cecily Mbarire y Saiponi han patrocinado proyectos de ley clave a los que no se les da la prioridad que tanto requieren.

### **La Ley de Patrimonio Conyugal**

La Ley de Patrimonio Conyugal, promulgada en noviembre de 2013, exige que se cuantifique la contribución no monetaria al patrimonio conyugal de cualquiera de los cónyuges. Si bien la contribución no monetaria se reconoce como contribución a la adquisición del patrimonio conyugal, no se ha fijado un umbral para su cuantificación. Estas disposiciones atentan contra el espíritu de la Constitución, que consagra la igualdad en el matrimonio, y, en caso de disolución del matrimonio, debilitan económicamente a las mujeres, haciendo que se conviertan en víctimas del fracaso o la disolución del matrimonio.

### **La Ley de Matrimonio de 2014**

La Ley del Matrimonio de 2014 consolida el registro de los matrimonios para proporcionar seguridad y claridad en relación con los privilegios conyugales de ambos sexos. Sin embargo, las mujeres que no hayan registrado su matrimonio consuetudinario en la fecha estipulada corren el riesgo de perder el derecho a su parte del patrimonio conyugal (que la mayoría de las veces solo ha sido registrado a nombre del marido). Habida cuenta de que el 75% de la población total de Kenya vive en zonas rurales con una infraestructura limitada o nula para acceder a la información, es probable que no tenga conocimiento de los cambios legislativos que afectan a sus derechos de propiedad dentro del matrimonio. Aunque se han logrado avances en ámbitos concretos dentro de la Ley de Matrimonio, como la formalización del derecho de las mujeres a poseer bienes, la legislación sigue sin garantizar los mismos derechos a las mujeres o protegerlas frente a la autoridad patriarcal.

### **La Ley de Protección contra la Violencia Doméstica de 2015**

Esta Ley contempla la protección y el socorro de las víctimas de violencia doméstica; la protección de la esposa y los hijos u otras personas a cargo. Asimismo, prevé órdenes de protección para las víctimas de violencia doméstica y otorga a la Policía un papel importante para intervenir en casos de violencia doméstica. Pese a las diversas medidas que ha establecido el Gobierno respecto de la violencia doméstica, la Ley no da respuesta a la ausencia de albergues para las víctimas.

**Recomendaciones**

- Promulgar una ley para la aplicación del principio de los dos tercios de cualquiera de los géneros y establecer programas de acción afirmativa que se ocupen de la igualdad de género;
  - Reforzar el acceso a oportunidades de financiación y poner en marcha programas de empoderamiento económico para las mujeres de manera que puedan participar en cargos políticos electivos;
  - Elaborar programas de sensibilización pública sobre el ejercicio de voto y la importancia del liderazgo y la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas;
  - Modificar la Ley de Matrimonio y la Ley de Patrimonio Conyugal para que estén en consonancia con la Constitución;
  - Introducir programas gubernamentales diversos dirigidos a crear conciencia sobre los derechos, el potencial y la capacidad de las mujeres de diferentes ubicaciones geográficas, clases sociales y orígenes tribales;
  - Vigilar la aplicación de la legislación y las políticas electorales, así como revisar y reforzar las estructuras de los partidos políticos para que sean más democráticas e inclusivas.
-